

Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación de los considerandos octavo a decimoquinto.

Y se tiene en su lugar, y además, presente:

I.- En relación con la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado:

Primero: Que para que opere la institución denominada cosa juzgada consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se requiere que se configure la denominada triple identidad, esto es que exista identidad legal de las partes, de la cosa u objeto pedido, y por último la identidad de la causa de pedir.

En relación a la identidad legal de partes se ha considerado que la cosa juzgada sólo alcanza a los sujetos del proceso o relación sustancial controvertida, razón por la que, para configurarse este primer elemento o requisito, es indispensable que la identidad de las partes corresponda a las mismas que litigan en similares calidades entre una y otra causa.

Respecto al requisito de la identidad de la cosa u objeto pedido, la jurisprudencia y doctrina han entendido que se refiere al beneficio jurídico que se reclama en el juicio, debiendo existir la misma o idéntica pretensión jurídica.

En tercer lugar, en cuanto a la identidad de causa a pedir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, y a como ha sido entendido por la jurisprudencia y doctrina mayoritaria, corresponde al fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, debiendo analizarse para ver si se configura, que en ambas demandas los hechos jurídicos y materiales invocados sean los mismos.

Adicionalmente a los requisitos ya referidos, existe un último elemento que debe contemplarse, esto es, que exista sentencia firme y ejecutoriada en la causa en virtud de la que se funda la excepción de cosa juzgada.



La cosa juzgada, en razón de los requisitos de procedencia, tiene como fin primordial evitar que se dicten sentencias contradictorias en causas en donde se configura la triple identidad señalada.

Segundo: Que la excepción en análisis se sustenta en existir pronunciamiento firme y ejecutoriado pronunciado por el decimocuarto juzgado civil de Santiago en los autos Rol N° C-1890-2006.

En el proceso referido se dictó sentencia de primer grado el cinco de julio de dos mil once que acogió la excepción de prescripción deducida por el Fisco de Chile, por lo que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios en todas sus partes. A su vez, esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago por decisión de diez de enero de dos mil catorce, en los autos Rol N° 7649-2011. Por último, por fallo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, pronunciado en los autos Rol N° 7888-2014, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo que la demandante interpuso en contra de la resolución antes referida.

Tercero: Que en cuanto a aplicación de la excepción de cosa juzgada respecto de la demanda planteada en estos autos ha de considerarse que en materia de prescripción de las acciones civiles derivadas de violaciones a los derechos humanos, existe asentada jurisprudencia de la Corte Suprema y de esta misma Corte, en cuanto a que la obligación internacional del Estado de Chile de reparación integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, impide que la regulación del derecho interno del instituto de la prescripción pueda invocarse como obstáculo para la obtención de dicha reparación.

En este sentido, igual razón debe predicarse respecto de la institución procesal de la cosa juzgada, que se aborda en este caso, en la que la pretensión de seguridad y certeza jurídica a que legítimamente obedecen sus



efectos, cede ante la exigencia de justicia en todo tiempo que importa la reparación integral en los crímenes de lesa humanidad.

Cuarto: Que en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado respecto de la cuestión debatida, en sentencia de casación de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, rol N°72.024-2020, lo siguiente: “29°)...*al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al derecho internacional de los derechos humanos; 30°) Que todo lo que se lleva reflexionado evidencia el error de derecho en que incurre la sentencia en examen, pues hace primar lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil sobre la normativa internacional examinada que impone al Estado de Chile el deber de reparar íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos que demandan los familiares de las víctimas y cuya existencia no ha sido controvertida... 31°) Que, en síntesis, no se desconoce aquí la validez y legalidad de los fallos anteriores, incluso dictados por esta propia Corte que declaran la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado de Chile, sino sólo se reconoce que la excepción de cosa juzgada derivada de esos pronunciamientos consagrada en el citado artículo 177, norma interna de carácter meramente legal, debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya referidos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior”.* (En el mismo sentido, Corte Suprema rol 36.319-2019).

Quinto: Que el cumplimiento de esta obligación internacional de reparación integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte



del Estado de Chile, alcanza a todas sus instituciones -entre ellas al poder judicial y de la forma en que lo ha estado haciendo en su consistente jurisprudencia-, lo que debería ser adecuadamente considerado también por el ente defensor de los intereses fiscales al momento de basar su estrategia judicial en causas de violaciones a derechos humanos en las excepciones de prescripción o cosa juzgada, a fin de precaver que el Estado de Chile no incurra en un eventual incumplimiento de sus obligaciones convencionales internacionales en esta materia.

Sexto: Que lo reflexionado obliga a este tribunal a desestimar la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco de Chile.

II.- En relación con la excepción de prescripción opuesta por el demandado:

Séptimo: Que respecto a la prescripción extintiva es dable señalar que constituye una máxima del derecho internacional que los primeros llamados a garantizar y promover el respeto a los derechos humanos son los Estados, ocupando los organismos internacionales un rol más bien orientador y fiscalizador de estas obligaciones, a la vez que, subsidiario en materia jurisdiccional. Es por estas razones que los instrumentos internacionales comprenden dentro de los imperativos jurídicos, dirigidos a los Estados Partes, la necesidad de que éstos garanticen a los particulares la existencia de recursos judiciales eficaces (Pacto de Derechos Civiles y Políticos artículo 2 N° 3 letra b; Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 25, sólo por citar algunos ejemplos), al tiempo que ordena que se asegure una justa y adecuada reparación a las víctimas de estas violaciones (es el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en su artículo 14), junto con la necesidad que se remuevan las trabas internas que impidan el goce efectivo de los derechos consagrados en dichos instrumentos.

Como se observa, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, obliga a los Estados a que: primero, aseguren el goce efectivo de sus



derechos humanos; segundo, que otorguen a los sujetos de estos derechos la posibilidad cierta de activar los recursos judiciales que sean eficaces para salvaguardar tales garantías -constituyendo este derecho a recurrir no sólo una medida procesal, sino un derecho humano autónomo-; y por último, obligando al Estado a reparar a las víctimas de estas violaciones, siendo imperativo que se dispongan los medios para que dichas vulneraciones no se repitan.

Asimismo, la acción objeto de la presente causa tiene una naturaleza humanitaria, motivo por el cual se debería adoptar una decisión a partir de los postulados del derecho internacional, en particular en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Al respecto es dable sostener en primer término, que, tratándose de una violación a los derechos humanos, el criterio rector, en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos y ello ha de ser necesariamente así, porque este fenómeno de graves transgresiones es muy posterior al proceso de codificación, el que no lo considera por responder a criterios ligados de manera directa con el interés privado y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

Octavo: Que, de esta forma, en atención a lo expuesto, la acción indemnizatoria deducida en autos por la actora no es de índole patrimonial como se ha asegurado, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual vinculada a un negocio común o extracontractual sino, simplemente, humanitaria.

Por su parte, no puede negarse el carácter de delito de lesa humanidad aquél que sirve de fuente u origen a la acción impetrada por el demandante, por lo que en lo tocante a la indemnización de perjuicios hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus



familiares para “conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente” (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 14 de marzo de 2001) los convenios o tratados internacionales “que deben ser interpretados y aplicados de acuerdo con las reglas generales de cumplimiento de derecho internacional y de buena fe (*bonna fide*), (*pacta sunt servanda*), regla de derecho internacional que se considera *ius cogens*, y además derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la que se encuentra vigente en nuestro país, desde el 27 de enero de 1980, y que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales; de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado” (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas; página 231).

En este orden de ideas, se colige que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la Constitución Política sino también de los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

Noveno: Que, de esta forma, resulta pertinente tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido ya a la obligación que tienen las autoridades estatales, específicamente el Poder Judicial, de observar los tratados que han sido ratificados por el Estado, teniendo en cuenta la jurisprudencia y doctrina de la Corte IDH como intérprete último de la Convención Americana, al señalar “124. La Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están



obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sujetos a ella, lo que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe hacer una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana" (Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 16 de septiembre de 2006).

Décimo: Que, en consecuencia, las secuelas civiles de los actos de tortura para con la demandante, esto es, un crimen de lesa humanidad, proscrito por Tratados Internacionales vigentes en nuestro país, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, no cabe acoger la prescripción alegada por el Fisco.

En efecto, de todos esos instrumentos internacionales se deriva que la acción civil para pedir la reparación del daño causado a las víctimas, a consecuencia de las torturas que le fueron impuestas en su momento, es imprescriptible, razón por lo que no tienen aplicación las normas del derecho interno, en especial el Código Civil, toda vez que la fuente que da origen a la reparación descansa en Tratados Internacionales de Derechos Humanos que deben ser aplicados con preferencia a las normas del Derecho Interno, por



expreso mandato constitucional del artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental.

Undécimo: Que, al efecto, en la materia, la Excma. Corte Suprema ha señalado que “(...) *este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.* DECIMO SEGUNDO: *Que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional en el que representaban al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231). De esta forma, el derecho de*



las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República que señala que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. El artículo 6 de la misma Carta Fundamental, al igual que la disposición antes referida, forma parte de las “Bases de la Institucionalidad” -por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y ordena que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. El mismo artículo 6 enseña que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”, y concluye señalando que “la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”. De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile, al estar en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile” (SCS Rol 9757-2015).

Duodécimo: Que, en atención a lo reflexionado, sólo cabe desestimar la excepción de prescripción alegada por el Fisco de Chile.

III.- En relación con la excepción de reparación integral opuesta por el demandado:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DWLTXSMEFXV

Decimotercero: Que en relación con la excepción de reparación integral del daño deberá desestimarse teniendo en consideración que los beneficios y las reparaciones a que alude el demandado no implican – necesariamente- la reparación íntegra de los daños padecidos por los demandantes en su calidad de víctimas de prisión política, tortura y violación de derechos humanos, y que el Estado de Chile se encuentra obligado a proporcionar. En efecto, el propio artículo 24 de la Ley N° 19.123 prescribe en su inciso primero que: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*, reconociendo que puede obtener otras reparaciones, como sería aquella decretada, de ser procedente, por los tribunales de justicia vía acción indemnizatoria.

Decimocuarto: Que lo anterior se fundamenta considerando que las reparaciones otorgadas por la legislación han sido concedidas y determinadas por el propio Estado, en términos generales y únicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, de manera que su efecto reparador no necesariamente es pleno. Además, los beneficios otorgados por la Ley N° 19.123, dicen relación más bien con prestaciones de carácter asistencial y patrimonial, lo que marca una diferencia ostensible con la reparación del daño moral. Así, las pensiones mensuales de reparación, la bonificación compensatoria, los beneficios médicos y educacionales, guardan una mayor armonía con los conceptos de daño emergente y lucro cesante, de manera que de estimarse y probarse que el daño moral inferido excede las mencionadas pensiones o es independiente a ellas, no existe razón suficiente como para, de antemano, rechazar la demanda.

Decimoquinto: Que en el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia: *“La normativa invocada por el Fisco –que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se*



persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido producto de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley” (Sentencia Corte Suprema en causa Rol N° 12.636-2018).

IV.- En relación con el fondo de la controversia:

Decimosexto: Que para los efectos de fijar el monto de la indemnización de perjuicios se debe tener en consideración que el Fisco de Chile no controvertió aquellos hechos relatados en la demanda y en virtud de los cuales se puede tener por cierto, entre otras circunstancias, que doña Claudina del Tránsito Caamaño Saldivia figura en la lista de víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o Comisión Valech bajo el número 3748. A partir 1973 fue detenida en varias oportunidades, ocasiones en la que fue trasladada a la Comisaría con el objeto de ser interrogada sobre el paradero de su pareja Renato Araneda. Luego, en febrero de 1975 fue detenida en la ciudad de Lebu por funcionarios de la DINA, ocasión en la que nuevamente fue preguntada respecto de su pareja y llevada a la Base Naval de Talcahuano, donde fue obligada a presenciar simulaciones de fusilamientos, torturas de otros presos políticos y fue objeto de diversos martirios, entre los que destacó haber sido víctima de violaciones. Según sus propias palabras: *“La primera vez me golpearon la cara, me puse a llorar, y uno de ellos hizo como un gesto de contención y me tiró al suelo y comenzó a desvestirme. Me violó. Después dijo “ahora te toca a ti”. Yo pensé que era otro de los torturadores. Este fue en particular un tema muy difícil de sanar, hasta el día de hoy lo recuerdo. No fui capaz de contárselo a absolutamente nadie, sino después de 46 años de ocurrido el hecho. Recién el año 2021 pude contarle a mi hija que yo había sido violada, sin decir detalles, sino solo*



esas palabras, por lo doloroso que es aún esto para mí ... La segunda vez que fui violentada sexualmente fue en el baño o camarines del gimnasio. Teníamos que gritar señor señor, quiero ir al baño cada vez que teníamos que hacer nuestras necesidades, allí en algún momento yo estaba sin pantalones en la taza del baño y llego violentamente un hombre, quien me tomó y procedió a violarme. Me tapo fuertemente la boca para que no gritara. Eso duró al parecer mucho tiempo, o al menos esa fué mi impresión. Desde allí en adelante, durante todo ese tiempo en cautiverio era mi gran temor tener que ir al baño. Siempre los funcionarios era hombres, nunca supe de mujeres uniformadas ... Mientras estuve detenida en el gimnasio de la Base Naval de Talcahuano, llegó mi primer periodo menstrual, di aviso a los funcionarios, pero nadie hizo caso de mí. Así es que tuve que utilizar mi propia ropa interior doblada como toalla higiénica". Su privación de libertad duró aproximadamente dieciséis días, siendo liberada en la ciudad de Concepción, y en junio de mil novecientos setenta y seis, junto a su pareja salieron exiliados con destino a Bélgica, volviendo al país años después. Nuevamente vale la pena escucharla al respecto diciendo: "Siempre mi dolor fue estar lejos de mi familia, de mis padres y hermanos, desarraigada de mi país y sus costumbres. Siempre escuchando noticias de Chile y estando atenta a lo que acá sucedía. Junto con la tristeza de estar lejos de mi familia y no estar en mi país, llevando auestas las secuelas de la tortura, había un tema muy importante para mí, pues don Elías Jana me había solicitado expresamente comunicarme con su familia y que le diera un mensaje a sus hijos y esposa. Esto nunca lo olvidé y se transformó en una tarea a cumplir cuando volviera a Chile. Recuerdo además que, en una ocasión, estando embarazada de mi hija Ana María, sensible a los olores, Renato se puso un perfume que identifiqué inmediatamente cómo el olor de uno de mis torturadores" ... Finalmente quiero agregar que siempre yo contaba lo que me había pasado como si hubiera sido un libro o película que vi, hasta que se



produjo la reconstitución de escena en la base naval y conocí el lugar en donde estuve detenida. Fuimos con unos compañeros, no muy convencida y con temor los seguí. Cuando estuve fuera de los camarines y vi el piso, cerámica negra y blanca, confirmé con certeza en mi cabeza que yo había estado allí; no pude seguir avanzando pues reconocí el lugar cómo en el que había sido torturada y corrí a cobijarme al lado del Ministro Aldana. Al llegar a mi lugar de trabajo la I. Municipalidad de Lebu, al día siguiente de la reconstitución de escena, me derrumbé. Lloré y lloré a gritos, porque comprendí que no era un libro, no era un película, era mi vida y yo había estado allí”. Hasta aquí las sentidas palabras de doña Claudina Caamaño, las que, aunque cargadas de dolor, son tan necesarias para nuestro entendimiento y el de Vuestra Señoría. El relato nos entrega una comprensión profunda de lo vivido por la actora”.

Decimoséptimo: Que el informe de daño evacuado por el Servicio de Salud Arauco establece que *“desde la perspectiva psicológica, desarrolla secuelas emocionales del tipo postraumático como consecuencia de la tortura política, lo que conllevó a desencadenar síntomas crónicos de reviviscencias de los acontecimientos, cefaleas, pesadillas y angustia grave, así como dolores físicos generalizado y localizado concomitante con estado de ánimo depresivo en la fase activa de re experimentación”,* agrega que *“por esta razón, resulta importante las relaciones interpersonales y el apoyo social para la recuperación del trauma, pero también un apoyo de tipo institucional, es decir, un sistema judicial que brinde reconocimiento y reintegración por el apoyo psicológico y social, como en la asistencia y prevención de la revictimización”,* indica que *“la perturbación del trauma en su biografía vital se ve agudizada por condiciones sociales que destruyeron su proyecto de vida, el impedimento de continuar con sus estudios superiores, separación de su familia de origen, el silencio y estigma social por la prisión política”.* Termina indicando que los diagnósticos son: *“Estrés postraumático cronificado por*



elementos agudización del entorno social y político” y “Cambio perdurable de la personalidad después de una experiencia catastrófica (Terrorismo de Estado)”.

Además, señaló que *“La sintomatología clínica de la evaluada a nivel de regulación del afecto, se mantiene en un estado depresivo bajo, falta de energía, sesgo cognitivo y carácter disfórico. A su vez, experimenta hiperfagia y trastorno del sueño en periodo de crisis de angustias con dificultades en el componente volitivo. A nivel de sentimientos posee reexperimentación postraumática asociado al miedo y desconfianza en el mundo y a las personas, angustia ante la soledad, culpa y vergüenza al evocar recuerdos de la tortura política. En términos interpersonales evita elementos de estrés como: lugares oscuros, vendarse los ojos, estar mucho tiempo sola y percibir aromas de perfumes masculinos, además de la exposición prolongada a temáticas de índole política que llevan a la polarización de la participación ciudadana”.*

Decimoctavo: Que según la declaración de doña Luisa Teresa Saavedra Droguett *“Ella cuando la vi, no recuerdo la fecha exacta, pero fue a principios del año ´74 más o menos, estaba en una situación de delgadez que se le caían los pantalones, tremendamente asustada, con una actitud de miedo y terror en su rostro y en sus actitudes, sin ganas de hacer nada y esa situación de miedo y de inseguridad también, porque es muy difícil entender esa situación. Yo lo conozco directamente, pero conozco directamente, perdón, porque me hace recordar a mi hermana que vivió situaciones horribles y además de torturas con mi sobrino, que no puedo olvidar. Ella actualmente tiene rasgos de esas características muy acentuadas todavía, de inseguridad, de miedo. Cuando viene a Santiago, no se atreve a hacer cosas que en otras circunstancias cualquier persona normal lo haría sin ningún temor, y lo he conversado muchas veces con ella y dice que se le han acentuado esas características con el tiempo”.*



Decimonoveno: Que respecto del daño moral la Corte Suprema lo ha conceptualizado como: *“un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos”* (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4ª, pág. 168). Asimismo, ha sentenciado lo siguiente: *“Que el daño moral, como todo daño, debe ser probado por quien sostiene haberlo padecido; al menos cuando es la base de la obligación de repararlo, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, en determinadas situaciones, por la naturaleza y características del daño material producido, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo”*. Así también ha sido resuelto (por ejemplo, Corte Suprema, rol 735-2015).

Vigésimo: Que el presente caso es justamente uno de aquellos en que “el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo”. En efecto, se trata del caso de una mujer joven que permaneció aproximadamente dieciséis días privada ilegalmente de su libertad, que fue sometida a crueles padecimientos físicos y psicológicos -siendo violada en más de una oportunidad- situación que le trajo como consecuencia una gran afectación no sólo a ella sino también a su grupo familiar, que quedó profundamente impactado con lo vivido, donde se destaca el exilio que debió vivir junto a su pareja, también detenida y torturada. Tales hechos, que son consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario en ningún caso ni momento validó la adopción de procedimientos y medidas como las operadas, abusando de una posición de poder y engendrando en la víctima una sensación de vulneración y despojo persistente, que razonablemente no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha personal y familiar, por lo que al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de



Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que el actor fue lesionado en su esfera inmaterial y en magnitud importante.

Vigésimo primero: Que no podría concluirse de otra manera, desde que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente a la demandante como víctima de la dictadura, como lo señala la Comisión Valech, a partir de lo cual y en conjunto con los otros antecedentes adjuntados al proceso, y, especialmente, que estos hechos no fueron cuestionados en el juicio en cuanto a su ocurrencia, solo cabe tener por cierta la versión entregada por la actora, y en relación al dolor moral invocado, tenerlo por serio y grave, por no poder esperarse otra cosa.

Vigésimo segundo: Que conforme al juzgamiento efectuado por esta Corte de los hechos narrados, no cuestionados en su ocurrencia, y la afectación de la demandante en su dimensión espiritual, que se aprecia como permanente en atención a las secuelas que quedaron establecidas en las circunstancias que se describieron, se concluye el otorgamiento de una indemnización por daño moral, que en prudencia y equidad, a la luz del mérito de los antecedentes, se determina en la suma de \$ 100.000.000 (cien millones de pesos).

Vigésimo tercero: Que la suma ordenada pagar en el motivo que antecede se reajustará conforme a la variación del índice de precios al consumidor por el período que media entre que la sentencia se encuentre ejecutoriada y el pago efectivo.

En el mismo período, las sumas referidas devengarán interés corriente, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1557 del Código Civil en relación con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República; y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, **se revoca** la sentencia de dieciocho de



diciembre de dos mil veintitrés, pronunciada por el decimosexto juzgado civil de Santiago, en los autos Rol N° C-3041-2022, y en su lugar se declara que:

I.- **Se rechazan** las excepciones de cosa juzgada, prescripción y reparación integral opuestas por el Fisco de Chile.

II.- **Se acoge**, sin costas, la demanda interpuesta por don Nelson Caucoto Pereira, abogado, en representación de doña Claudina del Tránsito Caamaño Saldivia, y se condena al Fisco de Chile a pagarle a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, la suma de \$ 100.000.000 (cien millones de pesos), más los reajustes e intereses señalados en el considerando vigésimo tercero de esta sentencia.

Se previene que el ministro Rodríguez Moreno estuvo, además, por condenar en costas al Fisco de Chile, teniendo en consideración que habiéndose acogido la demanda en su parte esencial, y teniendo especialmente en consideración que el Estado de Chile, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del caso “Órdenes con Estado de Chile”, reconoció explícitamente la improcedencia de la aplicación de la institución de la prescripción extintiva en aquellas causas en que se persigue la indemnización de perjuicios por ilícitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, y pese a ello, persiste con dicha línea de defensa en las causas substanciadas en la jurisdicción nacional, queda en evidencia que dicha conducta atenta contra la doctrina de los actos propios y vulnera la buena fe procesal en la forma de abordar la defensa de sus intereses en la controversia de autos.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 593-24



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DWLTXSMEFXV



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DWLTXSMEFXV

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Jose P. Rodriguez M., Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogado Integrante Jorge Gomez O. Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DWLTXSMEFXV